

Los últimos asesinatos

El 20 de octubre de 2011, ETA mandó a varios medios de comunicación un vídeo de treinta minutos en el que anunciaba “el cese definitivo de la violencia armada”. Aquel colofón audiovisual era el decimocuarto “alto el fuego” de la historia de la banda terrorista, pero tenía unos antecedentes y una escenografía que podían hacer pensar que el adjetivo “definitivo” iba a ser real. Si lo era, el comunicado supondría el punto final a medio siglo de asesinatos, chantajes, amenazas y secuestros.

Desde el asesinato en Villabona del guardia civil **José Pardines Arcay** el 7 de junio de 1968 hasta el tiroteo que el 16 de marzo de 2010 costó la vida al gendarme francés **Jean-Serge Nérin** al oeste de París, ETA había acabado con la vida de 858 personas, 42 de ellas en la Comunidad Foral.

En sus últimos ocho años de existencia —los que se recogen en este capítulo— la banda terrorista perpetró quince asesinatos. Tres de los fallecidos eran ciudadanos navarros. Los policías **Julián Embid Luna**, de 53 años, y **Bonifacio Martín Hernández**, de 56, murieron en Sangüesa al estallar una bomba lapa colocada en su coche, el 30 de mayo de 2003. Habían acudido a la localidad para tramitar los DNI de los vecinos de la zona. La explosión causó heridas de gravedad al tercer policía que viajaba con ellos, **Ramón Rodríguez Fernández**, y a un vecino de Sangüesa, **Carlos Gallo**, empleado de Telefónica. La violencia del doble crimen quedó reflejada en los periódicos con unas imágenes escalofriantes que volvieron a poner de manifiesto cuál era el lenguaje —el único lenguaje— que los terroristas estaban dispuestos a emplear.

Seis años después, el 30 de julio de 2009, fue asesinado en Palma de Mallorca el guardia civil pamplonés **Diego Salvá Lezáun**, de 27 años. ETA había colocado una bomba lapa en los bajos de un todoterreno del Cuerpo que se encontraba aparcado junto al centro de denuncias del municipio de Calviá. La explosión del artefacto acabó con su vida de forma inmediata, y con la de su compañero, el agente burgalés **Carlos Sáenz de Tejada**, de 28 años.

Aunque el número de víctimas mortales y de secuestros descendió en Navarra en aquellos últimos años de actividad de ETA, las acciones de *kale borroka*, los ataques contra comercios, contra sedes de partidos políticos o contra las instituciones más desprotegidas, aumentaron de forma considerable, dejando decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

Desde la estación de servicio de la empresa Cepsa y el Hotel Maisonnave —atacados ambos en Pamplona en 2003— hasta el atentado que en 2005 dejó en ruinas la discoteca Bordatxo de Santesteban o el que calcinó la ferretería del concejal de UPN **José Antonio Mendive** en Barañáin, muchos pequeños negocios sufrieron de forma directa la violencia. En algunos casos, los ataques se debieron a que los responsables de las empresas o de los comercios se habían negado a ceder a la extorsión económica de ETA.

A pesar de las cabriolas semánticas que exhibieron algunos políticos para no llamar terroristas a quienes acababan de reducir a escombros un concesionario o una ferretería, lo cierto fue que la ofensiva de “violencia urbana” respondió a una estrategia perfectamente orquestada. Juzgados de paz, oficinas de Correos, entidades bancarias, cajeros automáticos y sedes de partidos y sindicatos —de algunos partidos y de algunos sindicatos— fueron objetivos frecuentes entre 2006 y 2008. Un sólo cóctel molotov puede causar daños millonarios, y los vecinos de muchas localidades navarras tuvieron ocasión de comprobarlo.

“Nada conseguirán quienes, despreciando los principios básicos del Estado de Derecho, utilizan la amenaza y la agresión como instrumento de su acción política, amparados en la cobardía del anonimato”, advirtió el entonces secretario general del PSN, **Carlos Chivite**, cuando atacaron la sede socialista de Sangüesa, el 30 de agosto 2007. Aquel año creció la frecuencia y la intensidad de los ataques, que se incrementaron un 170 por ciento, de acuerdo con los datos que aparecieron en la Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Y continuaron los atentados de más envergadura. El 14 de mayo de 2008, el sargento tudelano **José Javier Cabrerizo Fernández**, de 41 años, quedó sepultado bajo los cascotes de la casa cuartel de la Guardia Civil de Legutiano (Álava). Pero sobrevivió. Sin embargo, el coche bomba que destruyó el edificio acabó con la vida del agente **Juan Manuel Piñuel Villalón**.

También en 2008, el 30 de octubre, ETA volvió a atentar contra la Universidad de Navarra. Era la quinta vez. A las 10.58, un coche cargado de explosivos estalló junto al Edificio Central, en una zona muy transitada por alumnos y empleados. La onda expansiva hirió a 28 personas y causó importantes daños materiales. Los gases que generaron la bomba y el incendio posterior se acumularon en el falso techo del Edificio Central y seis días después, al extenderse por el inmueble, causaron una intoxicación grave a 154 personas, de las que casi cien tuvieron que ser ingresadas.

Aquel fue el último gran atentado en Navarra. El comunicado de alto el fuego que ETA hizo público tres años después hablaba de razones estratégicas, pero detrás de la decisión podían adivinarse fácilmente otros argumentos: la presión policial, las investigaciones judiciales, la asfixia económica, las crisis de liderazgo internas y la falta del apoyo internacional. “Ahora habrá que seguir el combate ideológico y político para evitar que desde el mundo etarra se intente capitalizar el final de ETA, por un lado, y se trabaje para conseguir la impunidad de los asesinos, por otro”, advirtió el periodista **Florencio Domínguez** a propósito de la nueva era que se abría con aquel comunicado. Ese es hoy el reto. ●